

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADA SUSTANCIADORA
ALBA LUCÍA GOYENECHE GHEVARA

Medellín, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

Radicación	05001-31-03-020-2023-00158-01
Proceso	Ejecutivo hipotecario
Demandante	Colceramicas S.A.S.
Demandado	Carlos Alberto, Diana María Hugo Alfonso Vélez y otros
Tema.	Apelación auto que negó nulidad
Decisión.	Confirma
Rdo. interno	058-23
Providencia No.	144-23

ASUNTO A TRATAR

Desata el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la codemandada María Teresa Vélez de Vélez, a través de apoderado judicial, contra el proveído del 14 de junio de 2.023 proferido por el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Medellín, en virtud del cual se negó la nulidad planteada por dicha parte dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario de la referencia.

ANTECEDENTES

1. Cursa en el Juzgado 20 Civil del Circuito de Medellín, proceso ejecutivo de acción real promovido por la Compañía Colombiana de Cerámica S.A.S. “COLCERAMICA S.A.S.” contra Carlos Alberto, Diana María, Hugo Alfonso Vélez Vélez, María Teresa Vélez de Vélez y María Teresa Vélez Vélez, en cuyo

trámite el gestor judicial de una de las demandadas promovió incidente de nulidad con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política, y los artículos 132 y 133 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias (Archivo 13 pdf, del expediente digital).

2. Enunció como argumentos justificativos de la nulidad del proceso, la falta de jurisdicción y competencia pues los títulos valores base del recaudo obligan a la sociedad DEPÓSITOS MIRANDA S.A.S. y no a los demandados. Que el mandamiento ejecutivo no vincula a la sociedad deudora, y que la parte demandante ocultó al despacho que la sociedad mencionada se encuentra en proceso de recuperación empresarial, el que se encuentra con acuerdo de pago, y ya incluyó a COLCERÁMICA S.A.S. como acreedora reconocida.

3. Que, en consecuencia, se debe decretar la nulidad de lo actuado incluyendo el mandamiento ejecutivo o remitir las diligencias al juez competente que es quien conoce de la “recuperación” empresarial.

4. Que también hay falta de legitimación en la causa por pasiva, o bien que debe integrarse el contradictorio con la mencionada sociedad, conforme lo consagra el artículo 61 del Código General del Proceso.

5. Por último, que las medidas cautelares en contra de los demandados constituyen un yerro flagrante dado que los hipotecantes no constituyeron obligaciones personales, ni suscribieron títulos ejecutivos como codeudores de la sociedad. Concluye que debe entonces decretarse la nulidad del proceso, o remitirlo por competencia al juez que conoce de la recuperación empresarial. De esta actuación adjuntó como prueba documentación consistente en un acuerdo de recuperación empresarial ante la Cámara de Comercio de esta ciudad, entre otros.

6. Surtido el trámite propio de esta clase de actuaciones, se finiquitó por auto de fecha 14 de junio de 2023, en donde el juez de conocimiento decidió negar la solicitud incidental.

7. La parte ejecutada interpuso recurso de apelación contra dicho pronunciamiento, siendo concedido en legal forma.

La apelación

8. El extremo apelante agregó a lo argumentado en su escrito inicial, que quien adquirió las obligaciones que se persiguen en el proceso fue la sociedad DEPÓSITOS MIRANDA S.A.S. suscribiendo las facturas allegadas como base del recaudo, y no los ejecutados, de quienes dijo que sí suscribieron la hipoteca, para garantizar las obligaciones de la sociedad.

8.1. Agregó que el mandamiento no vincula a la sociedad deudora, sino solo a los socios que suscribieron una garantía, que no ninguna otra obligación ni como codeudores o avalistas.

8.2. Que, de manera errática, procedió el juez a decretar medidas cautelares contra el patrimonio personal de los ejecutados, desconociendo el proceso de recuperación empresarial del que se informa que ya fue notificada la sociedad demandante, siendo éste un trámite arbitral de recuperación empresarial de la sociedad DEPÓSITOS MIRANDA S.A.S.

CONSIDERACIONES

1. Desde ya se advierte que la providencia impugnada se ajusta a derecho, más no por las razones dadas por el *a quo* sino por las que a continuación se señalan.

2. Recuérdese que conforme al precepto del artículo 133 actual del Código General del Proceso las causales de nulidad siguen siendo taxativas, razón por la cual el juez habrá de desestimar, e incluso proceder a su rechazo de plano, cuando la causal invocada no se encuentre debidamente prevista en la ley, sea promovidas fuera de término, sea solicitada sin el lleno de los requisitos formales o que resulte palmariamente improcedente, de acuerdo con la misma norma. La regla citada reza en el párrafo final: “Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”.
(subraya el despacho).

3. Ahora bien, en relación con el mandamiento ejecutivo, tiene dicho nuestra ley procesal que es recurrible y lo es en el evento que prescribe el artículo 430 del Código General del Proceso. Es, mediante el recurso de reposición que pueden discutirse los requisitos formales del título. Noticiada la demandada de la acción instaurada en su contra, a través de apoderado judicial, la actuación primera que debió haber ejercitado en contra de la orden de pago era el mencionado recurso. No son entonces los argumentos dados por el censor, causales admisibles dentro del marco del instituto de las nulidades, que permitan su análisis de fondo en este escenario, los que sí pudieron serlo mediante el mencionado recurso, de allí que no se revocará lo decidido.

4. En el evento, la nulidad propuesta se funda en aspectos que debieron ser invocados en el citado recurso en contra del mandamiento ejecutivo, ora en contra de la decisión de disponer sobre las medidas cautelares conforme con lo reglado por la ley adjetiva; puesto que no es discutible que la demandada podía presentar sus inconformidades u oposición a la orden de pago dispuesta, pero en la oportunidad procesal correspondiente y mediante el mecanismo que la ley ha previsto para ello.

5. Nótese que ninguno de los argumentos del censor al interponer la nulidad, como fueron: que los títulos valores aportados no obligan a los demandados, que la sociedad obligada no fue vinculada al proceso y que la misma se encuentra en un proceso de recuperación empresarial, entre otros, pueden ser considerados como tesis que estructuren alguna de las causales de nulidad contempladas en el artículo 133 de la ley procesal.

6. Tampoco la nulidad por el hecho de estar la sociedad Depósitos Miranda S.A.S. en un posible proceso de reestructuración empresarial podía abrirse paso por vía del instituto de la anulación procesal de lo actuado para así declararlo, porque este es un aspecto de orden sustancial que podría prosperar, solo si se acreditan los presupuestos de la norma especial que consagra aquella reestructuración empresarial (ley 1116 de 2006).

7. Y menos aún, la argumentación puesta de presente ante el *a quo*, atinente a la configuración de la nulidad constitucional consagrada en el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, pues como es sabido ésta atañe a la prueba obtenida con violación del debido proceso, sin que sobre ese tópico se hubiera aducido soporte fáctico alguno; luego, de querer favorecerse con la declaratoria de nulidad de la actuación bajo la apariencia de tal vicio, tampoco es procedente de cara a la articulación en cita.

8. Lo cierto es que la demandada pudo oponerse a la orden de pago mediante el recurso que la ley procesal le imponía, sin que pueda entonces ahora abrirse paso la nulidad formulada, con la serie de argumentos dados, por no estar autorizada en la ley para el evento planteado.

III. CONCLUSIÓN

9. Las anteriores circunstancias, obligan a la confirmación de la providencia impugnada, pero bajo las consideraciones aquí señaladas.

IV. DECISIÓN

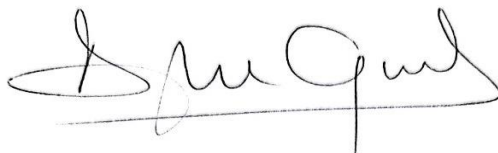
En mérito de lo expuesto, la **SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de fecha 14 de junio de 2023, proferido por el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de esta ciudad, conforme con las reflexiones consignadas en la parte motiva.

SEGUNDO. Sin costas.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alba Lucía Goyeneche Guevara', written in a cursive style.

ALBA LUCÍA GOYENECHÉ GUEVARA
Magistrada

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022